

La educación y las oportunidades laborales

El mundo está viviendo actualmente una época de profundas y amplias transformaciones, sobre todo en el plano tecnológico y económico. Estos cambios están propiciando una profunda reconsideración del rol social de la educación y la manera en que ésta se realiza. La mayoría de países del mundo están considerando a la educación como la clave para adaptarse a la economía globalizada y como un ingrediente fundamental para alcanzar las metas de desarrollo con participación y equidad.

Entre las metas sociales fundamentales que están determinando la inversión y la dirección de las reformas y transformaciones educativas en Latinoamérica están: 1) proveer una fuerza de trabajo (capital humano) capacitada y flexible para propiciar el crecimiento económico y la eliminación de la pobreza, 2) promover la cohesión social mediante el aumento del capital social, y 3) consolidar los procesos democráticos. Puesto que en otros capítulos de este informe se hace referencia a la segunda y tercera metas sociales, en el presente capítulo se analiza la situación de Honduras en relación con la primera de estas metas. En este sentido, el mismo debe considerarse tanto como un complemento del capítulo anterior como una profundización del vínculo de la educación con el mercado laboral, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad social, sobre todo de tipo económico.

El análisis medular del capítulo se centra en el estudio de dos factores fundamentales para la fuerza laboral: su preparación y su inserción en el mercado laboral, y en dos factores condicionantes y resultantes: la pobreza (medida sobre todo en términos de insuficiencia de ingresos), y la desigualdad, sobre todo de tipo económica.

El capítulo está dividido en varios acápite. En el primero, se hace una breve descripción de la situación y evolución reciente de las oportunidades laborales que la gente ha tenido en el país sobre todo en la última década; en el segundo, se analiza la forma en como la desigualdad de tipo económico condiciona la adquisición de las capacidades educativas y como, la adquisición de estas capacidades educativas, condiciona a su vez las oportunidades laborales de las personas. En el tercer acápite se muestra como un mejor nivel educativo garantiza un mejor salario a las personas y, consecuentemente mejores posibilidades para la gente de escapar de la pobreza. Finalmente, en el último acápite se

tratan de determinar los desafíos más importantes que enfrenta el país en relación con la temática tratada en el capítulo.

Capacidades y oportunidades laborales

Los capítulos 2 y 3 de este informe permiten concluir que los altos grados de pobreza existentes en el país son el producto fundamentalmente de una baja productividad que se traduce en un ingreso global y per cápita muy bajo, y de un alto nivel de desigualdad tanto en el acceso a bienes y servicios como en las oportunidades.

La remuneración por el trabajo realizado constituye la principal fuente de ingresos de las familias tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados. En los países más pobres como Honduras, que además no cuenta con una adecuada red de protección social universal, el ingreso que proporciona el trabajo es la única fuente del mismo para las familias pobres.

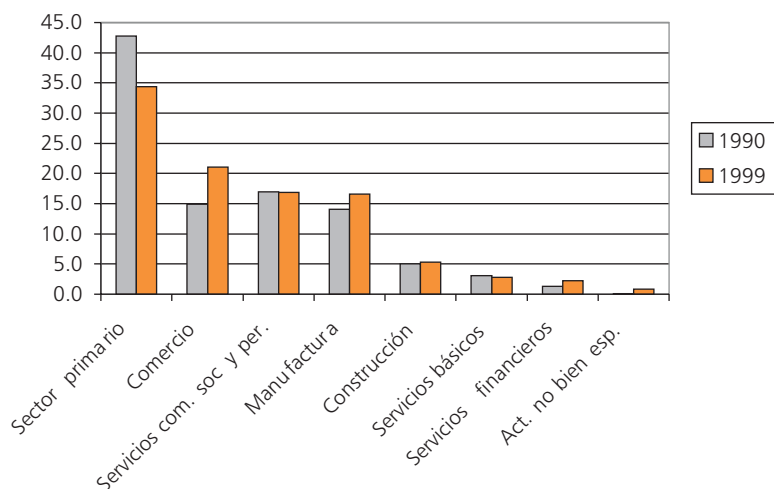
El ingreso de las personas está determinado, sobre todo, por la estructura del mercado laboral y por el nivel educativo alcanzado por las personas. El primero de estos aspectos se estudia en el presente acápite y el segundo en el siguiente.

La coyuntura mundial y las diferentes innovaciones y programas de ajuste estructural de la economía ensayadas en el país en las últimas décadas han dado como resultado la todavía incompleta transición de una economía tradicional a una modernizada y diversificada. Una muestra de esto lo constituyen los cambios que se operan en el mercado de trabajo en los últimos cuarenta años. Según datos del PNUD (1997), la PEA en la agricultura bajó del 70% en 1960 a 41% en 1990, mientras que en la industria subió de 11% al 20% y en los servicios del 19% al 39%.

La misma tendencia se observa en la década de los noventas. En el sector primario la PEA bajó de 41% a 34.4% en 1999 (véase gráfico 6.1). La disminución en este sector coincide con la diversificación del mercado de trabajo hacia varias actividades de los otros sectores. Esta diversificación ocurrió antes en los países desarrollados, conforme una secuencia lógica y acelerada según la cual primero predominan las actividades secundarias y luego las terciarias. En los países en desarrollo como Honduras, se salta directamente de la preponderancia

GRAFICO 6.1

PEA: según rama de actividad económica, 1990-1999



Fuente: Elaboración propia con base en D.G.E.C. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 1994 y 1999.

de actividades del sector primario a la de actividades del sector terciario, en lo que se ha dado en llamar «terciarización» de la economía. Todo esto ocurre en el marco de un veloz crecimiento poblacional, sobre todo en el área rural, que al no ofrecer oportunidades reales al creciente número de personas, las expulsa hacia las ciudades, en donde se ubican especialmente en actividades informales.

El sector primario, en primer lugar, sigue siendo el que más absorbe fuerza de trabajo, aunque existe una clara tendencia a que pierda su importancia relativa y a que contribuya cada vez menos al PIB que los demás sectores. En segundo lugar, después del sector primario, la mayor ocupación de la PEA se encuentra en el comercio que es una actividad del sector terciario cuya tendencia es a la alza al pasar de un 14.9% a un 21% entre 1990 y 1999. En tercer lugar se encuentra la ocupación en servicios comunales, sociales y personales con un 17%, aunque su lugar se lo disputa la ocupación en manufactura que muestra una tendencia más fuerte al alza al pasar de un 14.1% a un 16.6% en el mismo período -sobre todo por la expansión de la industria maquiladora. El sector terciario no es aun preponderante porque combinadas la ocupación en servicios y manufactura, que son actividades del sector secundario, superan los niveles de ocupación de aquél, lo que no resta importancia, sin embargo, a su notable crecimiento. En las otras ramas de actividad (construcción, servicios básicos y servicios financieros), la PEA llega a representar porcentajes inferiores al 5.5%. A lo anterior hay que

agregar la informalización que está sufriendo la economía y que no se refleja en las cifras nacionales.

Al analizar el sector secundario, se nota que la manufactura con un 14.1% de la PEA en 1990, se situaba en cuarto lugar en ocupación de la fuerza de trabajo (sobre todo por la expansión de la industria maquiladora), y en segundo, los servicios comunales, sociales y personales. En 1999 se observa que la PEA en la manufactura ha crecido al 16.6% y le disputa el tercer lugar a los servicios comunales, sociales y personales. Pero el sector en donde la PEA se ha concentrado más es el sector terciario y, dentro de él, el comercio pasó de un 14.9% a un 21% en el mismo período.

Pese a que la proporción de la PEA en los diferentes sectores, en 1998, era de aproximadamente un 35% en el primario, un 25% en el secundario y un 40% en el terciario, la contribución de cada uno de ellos al PIB fue de 21%, 28.6% y 50.4%, respectivamente, lo que muestra una baja productividad, sobre todo del sector primario.

Otros dos indicadores importantes de la transformación de la fuerza de trabajo son la evolución de la participación de la PEA femenina y la infantil-juvenil. Durante la década de los noventa la PEA femenina pasó del 29% al 36%, cuya presencia sigue siendo muy escasa en el sector primario, es casi igual a la masculina en el secundario y sobrepasa ligeramente a ésta en el terciario. La PEA infantil (10-14 años) aumentó en un 12.5% entre 1990 y 1999 y la adolescente (15-18 años) en un 44.3% en el mismo período.

Según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de marzo de 1999, en ese año la PEA infantil representaba aproximadamente el 6% de la PEA total y la juvenil el 15%, lo que significa que había 139,330 niños y niñas y 344,975 adolescentes trabajando o buscando trabajo en Honduras. Estos porcentajes son de los más altos en la América Latina y muestran una tendencia que en realidad compromete las perspectivas de sostenibilidad del desarrollo en el país, si se considera que la mayoría de estas personas deberían estar más bien asistiendo a los centros educativos (véase PNUD/INDH, 1999).

En relación con el género, el sector primario y las ramas económicas de menor representatividad son abrumadoramente masculinas, mientras que en las del comercio y los servicios sociales y personales hay un ligero predominio femenino. Entre las categorías de trabajadores la que prevalece es la de trabajador asalariado, pero en el sector primario y el comercio lo son los trabajadores por cuenta propia.

En cuanto a la relación zonas urbanas y rurales, en las primeras predominan las ocupaciones de los sectores secundario y terciario, mientras en las segundas las del primario. Se debe también señalar que la PEA rural es ligeramente superior a la urbana al concentrarse en la primera un 52.5%.

Otros factores importantes en relación con las oportunidades que ofrece el mercado laboral hondureño son, por un lado, la relativamente pequeña fuerza laboral con la que cuenta el país y, por otro, su grado de utilización. En cuanto a lo primero, en 1990, de acuerdo con las EHPM de la DGEC, la PEA o fuerza de trabajo representó sólo el 51.3% (1,605,917) de la población en edad de trabajar (en países desarrollados este porcentaje es de más del 70%, lo que se explica, en gran medida, por la composición demográfica de la población). De este total, la tasa de participación masculina fue de 73.5% y la femenina de sólo 29.8%. En 1999 el porcentaje global se mantuvo prácticamente igual al constituir la PEA el 51.2% (2,388,299) de la población en edad de trabajar.

Con la tasa de participación por género en 1999, la masculina fue de 75.2% y la femenina de 39.1%, lo que indica la rápida incorporación de la mujer a las actividades productivas en la última década, tal

como se había mencionado antes (véase cuadro 6.1).

En relación con las áreas geográficas, se puede apreciar en el cuadro 6.2 que la tasa de participación en las zonas urbanas es mayor, en general, que en las rurales. Al hacer la comparación por sexo es evidente que la tasa de participación femenina es mayor en el área urbana que en la rural; lo opuesto sucede entre los hombres. Además se ve que la mayor participación femenina se da en el Distrito Central.

El cuadro 6.2, que compara a Honduras con otros países latinoamericanos con similar o mejor nivel de desarrollo humano en relación con tasas de participación en las zonas urbanas, indica que este país tiene una tasa de participación masculina más elevada y algo semejante ocurre con la tasa de participación femenina que sólo es inferior a la de El Salvador.

CUADRO 6.1

Distribución de la PEA por área geográfica y ciudades principales, 1999

	Nacional	Rural	Urbano	Distrito Central	SPS
PEA total	2.388.299	1.252.846	1.135.453	396.990	199.696
Hombres	1.528.728	880.917	647.811	210.723	111.185
Mujeres	859.571	371.929	487.642	186.267	88.511
Tasa de participación total	56,5	55,1	58	60,1	59,7
Masculina	75,2	78,4	71,2	69,9	71,5
Femenina	39,1	32,4	46,5	51,9	49,5
Ocupados	2.299.005	1.225.416	1.073.589	373.589	188.963
Asalaridados	1.075.838	444.065	631.773	234.393	124.263
No asalariados	1.223.167	781.351	441.816	139.196	64,7
Desocupados	89.294	27, 430	61.864	23.401	10.733

Fuente: Elaboración propia con base en D.G.E.C. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 1999.

CUADRO 6.2

Tasa de participación de hombres y mujeres en la actividad económica, según grupos de edad, zonas urbanas, 1998

Países	T	Hombres				Mujeres				
		15-24	25-34	35-49	50 y más	T	15-24	25-34	35-49	50 y más
Chile	74	44	93	97	64	41	30	57	54	26
Costa Rica	78	61	96	97	62	44	42	62	56	22
Honduras	87	67	97	98	76	49	39	62	64	34
El Salvador	77	59	94	96	67	52	39	67	70	34

Fuente: CEPAL, 2000a

Este cuadro también muestra la mayor participación en la actividad económica de los grupos de edad comprendidos entre los 25 y los 49 años en todos los países considerados. Llama la atención la alta tasa de participación en las actividades económicas que tienen en Honduras los grupos juveniles (15 a 24 años) y los de mayor edad (50 y más años) con respecto a los otros países.

En cuanto al grado de utilización de la fuerza laboral, las encuestas de hogares señalan que el mercado laboral ha tenido una elevada capacidad de absorción en la última década. En 1990, el total de ocupados de los que forman parte de la PEA era del 95%, lo que indica que sólo existía un desempleo abierto del 5%. En 1999 la situación mejoró un poco, al pasar el porcentaje de ocupados al 96.3% con un desempleo abierto del 3.7%. En el cuadro 6.2 también se aprecia que la tasa de desempleo abierto en el país para 1999, es mayor en la zona urbana (5.4%) que en la rural (2.1%), y que es en el Distrito Central (5.9%) y en San Pedro Sula (5.4%) donde se concentra la mayor tasa de desempleo abierto.

En relación con esta variable del desempleo abierto, Honduras también se compara favorablemente con otros países de igual o más alto nivel de desarrollo humano de la región. Según datos de la CEPAL (2000a: 267), la tasa de desempleo abierto urbano en 1998 era de 10.1% en Chile, 5.3% en Costa Rica, 7.6% en El Salvador y de 4.7% en Honduras. De acuerdo con el *Balance Preliminar de las Economías Latinoamericanas* presentado también por la CEPAL (2000b), entre 1998 y 1999 la creación de empleos se contrajo en la mayoría de los países sudamericanos. Dejó ver un mayor dinamismo en México, Centroamérica y gran parte del Caribe. En la región, en su conjunto, el empleo se redujo de 53.7% de la población en edad de trabajar, en 1998, a 52.5% en 1999. El desempleo aumentó de 8.0% a 8.7%; este último porcentaje representa la tasa más alta registrada desde que se dispone de información sobre un número significativo de países. Sin embargo, según la EHPM, la tasa de desempleo abierto en Honduras bajó del 4.7 al 3.7 entre 1998 y 1999 como efecto del proceso de reconstrucción.

El ya mencionado estudio de IPEA también confirma la relativa mejoría del empleo en Honduras. De acuerdo con este estudio el mercado de trabajo hondureño ha probado ser capaz de generar empleos a una tasa superior a la del crecimiento de la población. Así, mientras la población en edad activa creció 35% entre 1990 y 1999, la ocupada 50%, lo que significa que se crearon cerca de 800 mil nuevos puestos de trabajo en ese período (IPEA., 1999: 4), aunque fuera más que todo en el sector informal.

El problema mayor con relación a la utilización de la fuerza laboral en Honduras, sin embargo, es que el mercado laboral no ha sido capaz de generar empleos de calidad. Esto significa que a pesar de la relativamente elevada creación de empleos

la gente sigue teniendo problemas para obtenerlos. Esto se puede apreciar fácilmente al considerar las tasas de subempleo, especialmente la de subempleo invisible. Los datos de las encuestas de hogares indican que en 1990 había una tasa del 4% de subempleo visible (personas que trabajan menos de la jornada normal de 36 horas y que no encuentran más trabajo) y una tasa del 31.2% de subempleo invisible (personas que trabajan en actividades por debajo de su calificación, en establecimientos con una productividad más baja de la normal o con ingresos menores del promedio establecido). La situación mejoró durante el resto de la década. En 1999 la tasa de subempleo visible fue de 3.1% y la de invisible del 19.1%. Este problema, como lo muestra el cuadro 6.2, afecta más a la zona rural que a la urbana.

En marzo de 1999 el subempleo visible en el área rural era de 3.3% y en la urbana de 2.8%; y mientras que la tasa de subempleo invisible era de 24.7% en la zona rural, en la urbana, era de aproximadamente la mitad (12.9%). En relación con las grandes ciudades, el problema del subempleo afecta más al Distrito Central que a San Pedro Sula. El subempleo visible en el Distrito Central es de 2.8%, mientras que en San Pedro Sula de sólo 0.8%; en cuanto al invisible, de 11.5% y 6.6%, respectivamente. Estos datos explican, en gran medida, la dirección de las corrientes migratorias.

A pesar de lo anterior, en general la reducción de ambos tipos de subempleo ha tenido que ver con el crecimiento absoluto del número de asalariados, del aumento en el salario medio nominal, de la participación mayor de los sectores modernos en la economía y del incremento del empleo en empresas de mediano y gran tamaño.

Los asalariados son los empleados, obreros y personal del servicio doméstico que reciben un sueldo, salario o jornal en el sector público o privado y que, por su condición, cuentan con otros beneficios sociales que no reciben otros sectores. Aunque el porcentaje de asalariados se ha mantenido más o menos constante en la década de los años noventa (46%), su número absoluto pasó de 707,985 en 1991 a 1,075,838 en 1999.

Según estimaciones de la CEPAL (2000b), la situación de los salarios reales fue más favorable que la del empleo en la región latinoamericana en 1999, a lo que contribuyeron las bajas tasas de inflación. En efecto, la consolidación del proceso de estabilización de los precios sigue siendo uno de los principales logros del decenio. La inflación se mantuvo bajo control, en torno al 10%, a pesar de la depreciación de varias monedas. En 17 de los 22 países con información disponible el alza de precios será de un solo dígito en el presente año.

En el caso de Honduras, la inflación se redujo del 15.9% en 1998 a 10.9% en 1999. Contribuyeron a frenar las presiones inflacionarias las donaciones externas de alimentos y el que se haya mantenido invariable hasta julio el precio de los carburantes. Los salarios también han sufrido incrementos rela-

tivos, los cuales han beneficiado, sobre todo, a los trabajadores de ciertos gremios que han logrado negociar contratos colectivos o arreglos especiales. El salario mínimo creció 25%, el de los médicos 30% y el de los docentes 20%. En el sector público se puso en marcha un programa de homologación salarial de puestos (CEPAL: 2000b).

A falta de una política real de salarios, los aumentos de éstos en el país se dan, ante todo, mediante la presión de las organizaciones sindicales, gremiales o de otro tipo que logran a veces buenos resultados en las negociaciones de las cláusulas salariales de sus contratos colectivos. Pero, de acuerdo con datos recientes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sólo un 10% de los asalariados se benefician o están protegidos por contratos colectivos (Heraldo Económico, 10/10/2000), lo cual es un indicador de la baja organización sindical y de la pérdida de poder de este sector. Para la mayoría de los trabajadores, por lo tanto, la situación no ha mejorado mucho. El salario mínimo del país (de Lps. 1.441,72 mensuales durante gran parte del año 2000), según las diferentes organizaciones obreras, no es suficiente para cubrir las necesidades mínimas de los trabajadores, por lo que a través de una reciente huelga general han solicitado, entre otras demandas, un aumento general de salarios, el cual fue parcialmente concedido por el gobierno.

Un asunto preocupante del desempleo es que el mismo afecta especialmente a los jóvenes, a pesar de que sólo representan el 30% de la PEA. El cuadro 6.3 muestra que tanto en 1990 como en 1999 más del 60% de los desempleados son jóvenes de 15 a 25 años. El grupo de edad de 26 a 35 años ha disminuido su representación entre los desempleados al pasar de casi el 22% en 1990 al 17% en 1999. Por el contrario, el de 36 a 55 años ha visto aumentar su número así como su porcentaje en la distribución del desempleo.

Por otra parte, tal como se observó anteriormente, la tasa de participación femenina viene creciendo acentuadamente y se ha acercado mucho a la de los demás países latinoamericanos. Sin embar-

go, en las áreas rurales es todavía bastante reducida (32.4%).

Finalmente, hay que apuntar que el mejoramiento de la calidad de los empleos depende de muchos factores que tienen que ver sobre todo con la modernización de la economía cuyos indicadores más explícitos son: el porcentaje de la población asalariada con respecto al total de la población ocupada, el peso relativo del trabajo no-agrícola y la importancia que asumen las empresas de 10 y más trabajadores asalariados. Tal como lo ha mostrado el estudio de IPEA, ninguno de estos factores ha mostrado mejoras sustanciales en el país en la última década.

La desigualdad en la adquisición y realización de las capacidades educativas

Una característica relevante de la fuerza de trabajo hondureña es su relativamente baja calificación y, lo más preocupante, la reducida tasa con que esa calificación ha mejorado a lo largo de las últimas décadas. Se observan elevadas diferencias de salario, por nivel educacional en el mercado de trabajo, en gran medida como respuesta a la gran escasez de mano de obra calificada. Conforme a los cálculos del estudio de IPEA, la educación secundaria tiene un valor particularmente elevado. Mientras un año adicional de educación primaria o superior sube los salarios en un promedio de 10%, uno adicional de educación secundaria en 15% (IPEA, 1999:6). Desafortunadamente, tal como se expuso en un apartado anterior, los jóvenes hondureños cuentan con muy pocas oportunidades de acceder a este nivel.

La educación no sólo eleva los salarios, sino que también facilita la inserción de la gente en el mercado de trabajo. Sin embargo, como se acaba de ver, la tasa de desempleo no declina mecánicamente con el grado de escolaridad, sino que tiende a ser relativamente menor entre aquellos con baja y alta escolaridad y mayor entre aquellos con educación secundaria.

CUADRO 6.3

Tasa y distribución del desempleo por grupos de edad, 1990, 1999

<i>Grupos de edad</i>	<i>1990</i>		<i>1999</i>	
	<i>% Distribuc.</i>	<i>Tasa Desemp.</i>	<i>% Distribuc.</i>	<i>Tasa Desemp.</i>
De 15 a 25	60,4%	5,6%	62,3%	4,8%
De 26 a 35	21,9%	2,7%	17,4%	2,0%
De 36 a 55	17,7%	1,8%	20,3%	1,7%
Total	100,0%	3,5%	3,0%	3,0%

Fuente: Elaboración propia con base en D.G.E.C. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 1990 y 1999.

El gráfico 6.2, que muestra la incidencia del desempleo abierto en las zonas urbanas de varios países latinoamericanos con diferencias de desarrollo, refleja patrones similares. Chile y Costa Rica, con niveles altos de desarrollo, revelan fuertes tasas de desempleo urbano. Este se concentra en los sectores con menor o mayor educación. México es el que indica una tasa de desempleo más pequeña, la cual aumenta a medida que aumenta la escolaridad.

En Honduras la menor tasa de desempleo (4) corresponde a las personas con mayor escolaridad (más de 13 grados); le siguen con una tasa de 4.3

los que tienen de 0 a 5 grados de escolaridad; con una tasa de 4.9 los de 6 a 9 grados de escolaridad; y con una tasa de 5.1 los que tienen de 10 a 12 grados de escolaridad.

En cuanto a la distribución del desempleo por años de instrucción, en Honduras, en 1999, los desempleados contaban un 20% con menos de 5 años de instrucción, un 47% con entre 6 y 9 años de instrucción, un 23% con entre 10 y 12 años de instrucción y sólo un 11% contaba con más de 13 años de instrucción.

Para la gente que sí esta empleada, es obvio que, en última instancia, el nivel salarial o de ingresos que tiene depende de la calidad de los puestos de trabajo, lo cual, a su vez, depende del crecimiento económico y de la calificación de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, de la política educacional. Por esta razón, es necesario estudiar más detenidamente el desempeño del sistema educativo hondureño en relación, sobre todo, con la fuerza laboral.

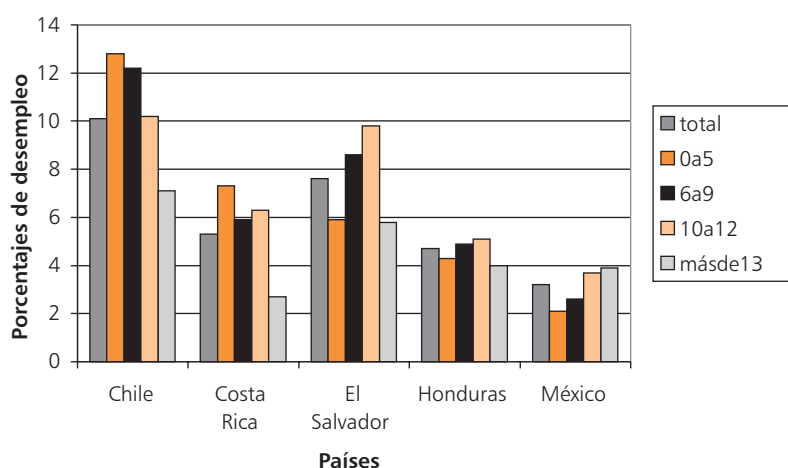
No cabe duda que la educación es un factor determinante en el mejoramiento de la situación de las personas, pero el acceso a ella en Honduras, tal como queda evidenciado en lo que sigue, está muy condicionado por las diferencias económicas y geográficas.

Según los datos de la Encuesta de Hogares, la tasa de alfabetismo en 1999 era de 80.47%: un 72.8% en el área rural y un 89.5% en la urbana (las cifras a partir de proyecciones del censo de población de 1988 son más bajas). Al dividir la población por deciles de ingreso se nota que el problema del analfabetismo sigue afectando más a los pobres, sobre todo a los que viven en la zona rural.

Los datos del cuadro 6.4 ponen de manifiesto que la relación entre el ingreso y el alfabetismo es

GRAFICO 6.2

Incidencia del desempleo abierto, zonas urbanas, según nivel de instrucción, 1998



Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL, 2000a

CUADRO 6.4

Porcentaje de alfabetismo por deciles de ingreso mensual del hogar, 1990, 1999

	1990	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Distrito Central	72.4%	82.4%	78.4%	83.8%	84.6%	87.5%	87.6%	90.4%	92.0%	95.7%	
San Pedro Sula	60.2%	79.4%	76.5%	78.6%	78.1%	82.7%	82.1%	84.9%	92.6%	97.3%	
Ciudades medianas	61.9%	53.8%	74.5%	61.8%	81.3%	80.4%	84.2%	81.6%	95.6%	95.2%	
Ciudades pequeñas	62.5%	69.3%	54.8%	74.2%	77.6%	76.9%	74.5%	75.2%	89.4%	85.5%	
Rural	50.6%	46.1%	51.4%	52.8%	56.1%	59.9%	66.6%	59.3%	81.6%	78.8%	
Urbano	63.8%	70.0%	67.3%	74.0%	80.0%	81.7%	81.8%	83.3%	92.4%	93.7%	
Total	52.8%	50.4%	54.3%	59.8%	65.3%	69.4%	74.6%	74.0%	89.2%	90.3%	
	1999	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Distrito Central	64.4%	81.2%	83.7%	88.1%	92.2%	89.1%	86.7%	92.9%	91.0%	96.8%	
San Pedro Sula	79.9%	93.3%	67.6%	82.2%	88.9%	86.9%	85.4%	92.2%	95.4%	97.3%	
Ciudades medianas	49.1%	90.4%	78.0%	78.9%	64.2%	89.5%	78.8%	96.5%	94.9%	99.0%	
Ciudades pequeñas	54.0%	62.1%	72.3%	83.8%	80.1%	74.7%	86.1%	89.7%	85.7%	86.8%	
Rural	54.6%	62.1%	62.4%	69.0%	66.6%	66.3%	78.5%	75.1%	83.2%	86.4%	
Urbano	58.4%	72.7%	76.3%	83.3%	82.6%	83.6%	84.8%	92.4%	91.2%	95.5%	
Total	55.3%	64.2%	66.3%	74.7%	74.8%	74.6%	82.3%	86.1%	89.0%	93.7%	

Fuente: Elaboración propia con base en D.G.E.C. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 1990 y 1999.

directamente proporcional, es decir, que a mayor ingreso mejor nivel de alfabetismo y viceversa. El cuadro también dice que los deciles de los menos favorecidos (1-6) son los que tuvieron mayores logros durante los noventa en alfabetización. Sin embargo, también se nota la enorme desigualdad existente en relación con estos dos factores. En 1990 casi 1 de cada 2 hondureños ubicados en el decil 1, con los más bajos ingresos, no sabía leer y escribir, mientras que sólo aproximadamente 10 de cada 100 del decil 10, con los más altos ingresos, se encontraban en esa situación. Aunque en 1999 ambos grupos tuvieron ligeras mejoras, la brecha se ha mantenido igual. Puede observarse que en los deciles más pobres (1-6), la tasa de analfabetismo es mayor que la del promedio nacional, con cifras arriba del 25%.

La desigualdad económica se amplía aún más cuando se agrega la variable geográfica. En el área rural existe un mayor porcentaje de analfabetos, los cuales se distribuyen en todos los deciles, expresión del menor acceso de los habitantes de esta área a los servicios educativos básicos. Además, la desigualdad entre los deciles en cada área es más elevada en la urbana que en la rural; la rural manifiesta más analfabetismo en todos los deciles. El problema en las dos áreas es más agudo para quienes se hallan en los deciles más pobres (1-3), aunque es serio incluso para las personas de mayores ingresos del área rural (decil 10), pues presenta una tasa del 13.6%, en comparación con sólo el 4.5% en la urbana.

En relación con la distribución por dominio. Se puede notar que en la mayoría de los deciles hubo mejoras durante la década, pese a algunas caídas en los intermedios y bajos. El dominio que presenta un mejor logro en casi todos los deciles es el rural, aunque siga estando muy lejos de alcanzar los porcentajes del área urbana. En 1999, como era de esperarse, el Distrito Central y San Pedro Sula presentaban los mejores porcentajes en todos los deciles, en tanto las ciudades pequeñas los peores en la mayoría de ellos. Pero, en general siguen siendo los deciles de menor ingreso los que revelan más altos porcentajes de analfabetismo y los deciles de mayores ingresos los que presentan menos analfabetismo.

La situación no cambia mucho cuando se hace el análisis de los años de escolaridad adquiridos por la población. Al igual que en la alfabetización, el país también ha logrado avanzar en relación con esta variable. Entre 1974 y 1999 la población adulta pasó de tener 2.3 años de escolaridad a 4.8. Esto significa que en dos décadas y media el país agregó un poco más de dos años, lo cual es insuficiente para impulsar su desarrollo. Además, aún se halla en el sitio más bajo de escolaridad de su fuerza laboral con respecto a otros países de la región. Según el estudio de IPEA, en 1999 al trabajador hondureño mayor de 25 años le correspondía un promedio de

escolaridad de 5.3 años, en tanto en 1995 en Costa Rica le correspondía un promedio de 7.0 años y en Panamá de 8.4 años.

Además, todavía persisten otras desigualdades notorias con respecto a esta cuestión. Así, en cuanto a género la brecha entre mujeres y hombres, a escala nacional, en 1999, se mantenía, las primeras un promedio de 4.7 años y los segundos de 4.9 años. Esta diferencia, no obstante, se marca más en las grandes ciudades y en la zona urbana.

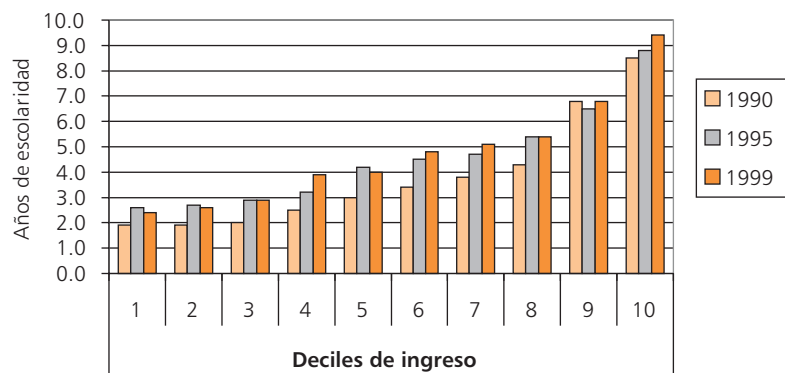
Con respecto a los dominios, todos muestran mejoras, siendo San Pedro Sula el que creció más y el Distrito Central el que menos. La separación entre el Distrito Central, con el promedio más alto (7.8 años), y el de las ciudades pequeñas (5.1 años) es considerable. En los departamentos la escolaridad de la PEA de 25 años y más está sobre el promedio nacional en Francisco Morazán con 7.5, Cortés 6.5, Atlántida 5.7 y El Paraíso 5.0. Se encuentran cercanos al promedio nacional, Olancho, 4.7, Comayagua y La Paz, 4.5, Intibucá y Yoro, 4.4, Colón, 4.3 y Ocotepeque 4.2. Se encuentran por debajo Valle, 3.9, Santa Bárbara, 3.7, Choluteca, 3.4, Lempira, 2.9 y Copán, 2.7.

La brecha más visible es la que se da entre el área urbana y la rural. En 1999 el promedio de la urbana (6.7 años) era más del doble que el de la rural (3.0 años).

Al medir la población por deciles de ingreso también se aprecia claramente que, al igual que en el caso del analfabetismo, la baja escolaridad afecta más a los pobres que a los ricos. Los datos del gráfico 6.3 indican, por un lado, que hay una correlación directa entre los ingresos percibidos y los años de escolaridad. Entre mayor es el nivel de escolaridad más aumentan los ingresos; aunque también la correlación es simétrica, y mayor es la escolaridad de los que perciben más ingresos. El gráfico también indica que casi todos los niveles tuvieron mejoras durante la década de los noventa, aunque con algunas fluctuaciones.

GRAFICO 6.3

Años de escolaridad según deciles de ingreso, 1990-1999



Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL, 2000a

Por otro lado, en el cuadro 6.5 se puede ver que, en general, los deciles donde se ubican las personas consideradas más pobres (1-5) están por debajo del promedio nacional en años de escolaridad. También es evidente la gran desigualdad entre quienes ganan menos (decil 1) y sólo tienen un poco más de dos años de escolaridad y quienes ganan más (decil 10) y poseen un poco más de 10. Además, se puede constatar que las personas del área urbana, sin importar el decil en que se encuentren, muestran un promedio de escolaridad de casi el doble de quienes habitan en área rural. Esto, de nuevo, manifiesta la falta de oportunidades de educación en esta área y la necesidad de que sea prioritaria en cualquier tipo de reforma educativa que se quiera implementar.

De forma similar al caso del analfabetismo, la separación en años de escolaridad entre pobres y ricos es mucho mayor en las zonas urbanas que en las rurales.

Con respecto a los dominios, se puede constatar que los mejores porcentajes en casi todos los deciles le pertenecen al Distrito Central. En éste,

incluso los más pobres (decil 1) tienen una escolaridad de más de cuatro años. Los más ricos, un promedio de casi doce años.

San Pedro Sula y las ciudades grandes presentan porcentajes similares en algunos deciles, pero más bajos que los del Distrito Central. No obstante, dentro del área urbana son las ciudades pequeñas las de porcentajes en todos los deciles que más se acercan a los del área rural.

En conclusión, se puede afirmar que el país en general presenta un nivel bastante bajo de años de escolaridad y que el problema es mayor para los más pobres (deciles 1-5) que viven en las ciudades pequeñas y, sobre todo, en el área rural. Una manera fundamental de mejorar estos indicadores es facilitar el acceso a la escuela a los más pobres.

Ahora bien, son los sectores de mejores ingresos los que no sólo disponen de mayores posibilidades de educación sino también de obtener los mejores resultados académicos.

Los datos del Cuadro 6.6 muestran que en 1997, a pesar de la amplia cobertura de la escuela primaria, había un 11% de los niños de nueve años del

CUADRO 6.5

Años de escolaridad por deciles de ingreso según dominio, 1999

Dominio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Distrito Central	4,0	4,4	4,2	5,5	6,2	5,7	7,0	7,4	8,5	12,0
San Pedro Sula	3,7	5,3	3,9	4,6	5,7	5,9	6,3	6,9	8,0	10,7
Ciudades medianas	5,7	3,1	4,9	4,5	4,9	4,3	5,4	6,1	8,9	10,7
Ciudades pequeñas	3,1	3,2	3,8	4,2	4,2	4,9	5,1	5,4	7,5	7,5
Rural	2,1	2,4	2,5	2,6	3,1	3,4	3,6	4,3	4,8	5,5
Urbano	3,4	3,7	4,1	4,7	5,1	5,2	6,0	6,5	8,2	10,7
Total	2,3	2,7	2,9	3,5	4,1	4,3	5,0	5,8	7,1	9,7
Mediana	4,0	4,4	4,2	5,5	5,3	4,9	5,1	5,4	7,5	8,6

Fuente: Elaboración propia con base en D.G.E.C. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 1999.

CUADRO 6.6

Indicadores educativos seleccionados por cuartiles de ingreso, 1997

Cuartiles	Niños(as) de 9 años que asisten a la escuela (%)	Niños(as) de 9 ó 10 años que asisten a la escuela y que no han aprobado al menos 2 años de estudio (%)*	Niños(as) de 12 o 13 años que han completado al menos cuatro años de estudio	Niños(as) de 14 o 15 años que han completado al menos 6 años de estudio (%)
1	89.0	19.0	82.3	66.6
2	91.1	8.3	83.3	77.4
3	93.7	6.9	91.6	79.8
4	97.7	3.4	90.0	91.0
5	92.9	10.9	85.8	77.4

* zonas urbanas solamente.

Fuente: elaboración propia con base en CEPAL, 1999.

cuartil de más bajos ingresos que no asistía a la escuela, en contraste con sólo un 2.3% de los del cuartil de mejores ingresos. Pero las diferencias mayores se dan en cuanto a logros, sobre todo en las zonas urbanas. Sólo un 3.4% de los niños de 9 a 10 años del cuartil de mejores ingresos que asisten a la escuela, no habían completado al menos dos años de estudio, en comparación con un 19% en el caso de los niños de la misma edad del cuartil que tiene menores ingresos. Esto indica que la deserción y la repitencia afectan más a los niños de los hogares pobres. Una situación similar se sigue dando con los niños de mayor edad. En 1997 sólo un 82% de los niños de 12 ó 13 años del cuartil de más bajos ingresos había completado por lo menos cuatro años de estudio, en comparación con el 90% de los de la misma edad del cuartil de los ingresos elevados.

La diferencia es más grande cuando se compara los que terminan la primaria. Mientras que el 91% de los niños y niñas de 14 ó 15 años de edad del cuartil de mayores ingresos logra completar la primaria, sólo lo hace un 66.6% de los del cuartil más pobre.

Estos indicadores muestran que las desigualdades educativas son determinadas por las desigualdades económicas no sólo en términos de oportunidades de acceso a la escuela sino también de permanencia en ella y de logro académico. Ampliar el acceso a la educación y fomentar el incremento de los años de escolaridad de la población de menores recursos, debe ser, por consiguiente una prioridad de la política educativa.

La educación como clave para evitar caer en la pobreza

A pesar de que la legislación hondureña estipula que la educación primaria es gratuita, la realidad es que implica gastos relativamente altos para las familias que tienen que comprar uniformes, útiles escolares y pagar cuotas cada vez más elevadas de matrícula. Según estimaciones conservadoras del Estudio Sectorial (SE/GTZ, 1997, TII: 263s), en 1996 las familias hondureñas se hacían cargo de casi el 30% del costo total de la educación primaria (aproximadamente 1,006 lempiras corrientes). Basado en otras investigaciones realizadas en el país, este mismo estudio calcula que los gastos de las familias por alumno en educación media básica eran en 1995 de Lps 1,810 por año y en la superior de Lps 1,269 en 1996. Para este mismo año, los costos sociales directos, medidos en términos del costo por estudiante en cada nivel educativo (en Lps corrientes), fue de 838 en primaria, 1,312 en secundaria y 5,672 en la superior. Aunque no existen datos más recientes, es de suponer que, debido entre otras cosas a la devaluación de la moneda, la alta tasa de inflación y el aumento de los precios de los artículos escolares y de las matrículas, tanto los costos privados como los sociales han subido considerablemente en los últimos años.

Todo lo anterior hace suponer que tanto los individuos como el Estado tienen que ver la educación como una inversión más o menos costosa que debe producir dividendos importantes. Aunque tanto para los individuos como para el Estado el valor de la educación va más allá del aspecto meramente económico, es innegable que éste se está convirtiendo un factor fundamental.

Para medir este factor usualmente se estiman tasas de retorno de la inversión educativa. Uno de los métodos más utilizados es el de la función de ingresos (véase nota técnica). Utilizando este método, el Estudio Sectorial calculó que la tasa de retorno de la educación, considerando todos los niveles, fue de 12.8% en 1990, lo que significa que un año más de educación implica un 12.8% de aumento en los salarios. Este porcentaje bajó levemente a 11.9% en 1996.

Al desagregar los retornos por nivel educativo se encontró que para este último año, un año adicional de educación primaria incrementaba los salarios de un individuo promedio en un 9.5%; uno de secundaria en un 12.7%; y uno de educación superior en un 15.1% (SE/GTZ, 1997: II 267). Según cálculos del IPEA, mientras un año adicional de educación primaria eleva los salarios en un promedio del 10%, uno de secundaria los eleva en un 15%, lo que indica la importancia de este nivel, tradicionalmente desatendido.

Al desagregar las tasas retorno de la educación por género y zonas de residencia, el Estudio Sectorial encontró, como tendencia en la década de los noventas, que son más altas en las mujeres y las zonas urbanas. Esta situación se aprecia muy bien en el año 1996, tal como lo muestra el cuadro 6.7. En las zonas urbanas un año adicional de escolaridad aumenta el ingreso de las mujeres casi dos puntos porcentuales más que el de los hombres. Al desagregar este dato por nivel, se puede ver que en todos, especialmente en el secundario, las mujeres obtienen mejores resultados que los hombres, por lo que se justifica una política educativa enfocada en la atención especial de las primeras (Cuadro 6.7).

CUADRO 6.7

Tasas de retorno de la educación según nivel educativo, zona y genero, 1996

Niveles	Total	Zona Urbana		Zona Rural	
		H	M	H	M
Primaria	9,5	8,8	9,5	9,8	9,9
Secundaria	12,7	10,5	13,9	12,3	14,4
Superior	15,1	16,1	16,3	13,1	NS
Total	11,9	11,2	13	10,6	11,2

Fuente: SE/GTZ. Estudio Sectorial de Educación, 1997.

Aunque con porcentajes menores, una situación similar se observa en la zona rural, en donde las mujeres también obtienen mejores retornos educativos que los hombres en total y en los otros niveles en donde se obtiene una relación significativa.

En términos absolutos, también se puede comprobar que la educación aumenta sustancialmente los salarios de los individuos. Tal como se aprecia en el cuadro 6.8, existe una correlación positiva entre el nivel de educación y el salario o ingreso mensual percibido. Es decir, a mayor nivel

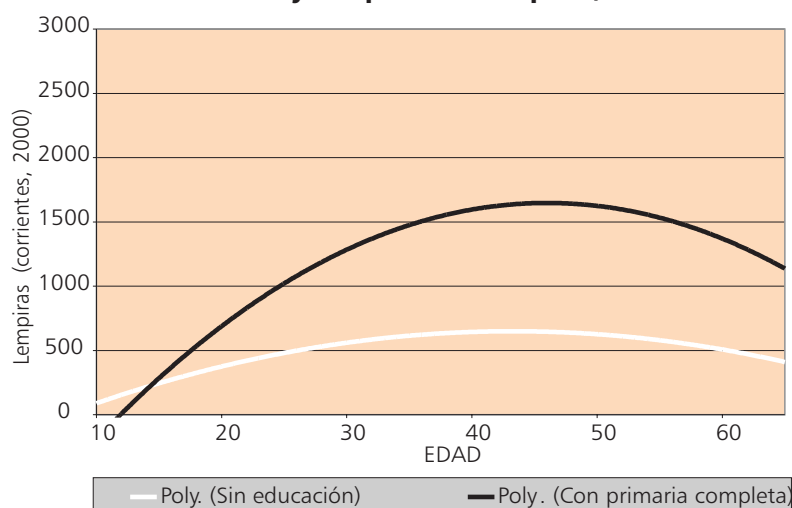
educativo mejor es el salario o ingreso. El cuadro 6.8 muestra que en marzo de 1999 el 62% de la población ocupada recibió un salario menor a Lps. 2,000 mensuales y apenas un 4.8% ingresos superiores a Lps. 5,000 mensuales.

A medida que aumenta el nivel educativo los ingresos van mejorando. Por ejemplo, mientras que el 61% de la población ocupada sin ningún nivel de educación gana salarios iguales o inferiores a Lps.1,000, sólo un 2.8% de la población ocupada con algún nivel de educación superior recibe este mismo ingreso. En el otro extremo, mientras que el 15% de la población ocupada con algún nivel de educación superior gana un salario igual o superior a los Lps.10.000 sólo un 1.4% de la población sin ningún nivel educativo percibe salarios similares. Los datos de este cuadro también expresan el hecho de que en términos de salario, la diferencia fundamental la hace el contar con la secundaria completa o algún nivel de educación superior (véase análisis en el siguiente apartado). Los pobres, medida la pobreza en términos de ingresos promedio, se encontrarían más que todo entre aquellos que no tienen ningún nivel de educación o que no han completado la primaria que en términos absolutos, constituyen la mayoría de la población hondureña.

El tener una educación primaria completa, sin embargo, también hace una diferencia importante. Según cálculos realizados por Anne Kielland, del Banco Mundial, a partir de una de las Encuestas de Hogares de 1999, en un estudio que está próximo a publicarse, el ingreso promedio de una persona de 10 a 67 años de edad con primaria completa es de Lps. 1,230.00. Mientras que para otra sin ninguna educación es de Lps. 467.00 (véase gráfico 6.4).

GRAFICO 6.4

Curvas de ingreso de la población de 10 a 67 años sin educación y con primaria completa, 1999



Fuente: Elaborado por Kielland, A. con base en D.G.E.C. encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, 1999.

CUADRO 6.8

Población ocupada por nivel de educación adquirido, según ingreso mensual por trabajo, 1999

	Total	Ninguno	Primaria		Secundaria		Superior
			1 a 3	4 a 6	1 a 3	4 a 7	
Total Pobl. Ocupada	2,299,005	396,148	474,119	865,892	200,633	244,816	113,409
Ingresos (en Lps corrientes)	%	%	%	%	%	%	%
Hasta 1000	37.5	61	46.5	37.3	22.5	10.3	2.8
De 1001 a 2000	25	18.4	22.4	27.5	30.5	30.7	14.9
De 2001 a 3000	10.7	4.3	6.6	8.3	10.8	21.2	18.6
De 3001 a 4000	3.9	0.6	2.3	3	5.4	10.6	11.9
De 4001 a 5000	2.3	0.3	1.7	1.4	2.4	6.6	10.5
De 5001 a 7500	2.1	0.5	1.2	1	2.2	7.2	11.3
De 7501 a 10000	1.3	0.2	0.6	0.6	1	2.5	10.3
De 10000 y más	1.4	0.1	0.5	0.6	0.7	1.5	14.9
No declaran	17	14.3	17.8	19.9	24.1	9.4	3.8

Fuente: Elaboración propia con base en D.G.E.C. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 1999.

Por lo tanto, considerando la expectativa de vida en el país y suponiendo que una persona tenga ingresos durante 57 años, se podría decir que la diferencia de ingreso entre ambas durante toda su vida sería de Lps. 521,892.00.

El cuadro 6.9 completa la imagen de la relación entre la educación y los ingresos mensuales de la población ocupada. Al comparar los datos se ve el notable incremento nominal de los salarios durante los años noventa. Aunque es evidente la pérdida de su poder de compra, según datos de la UNAT (2000:17) el salario promedio en la ocupación principal creció en términos reales en cerca del 12% anual en el transcurso de la década.

La situación ha mejorado ostensiblemente en todos los campos y en todos los niveles educativos. Sin embargo, la brecha entre los diferentes pro-

medios de ingreso por nivel educativo no han disminuido. En 1999 se observa que a medida que aumenta el nivel educativo también lo hace el promedio de los salarios. La diferencia más grande se da en el paso entre la educación secundaria y superior.

Aunque la correlación se mantiene, se puede también ver que las personas del área urbana logran mejores ingresos que las del área rural en todos los niveles educativos, con excepción del de educación superior no universitario, en el que se hallan pocas de esas personas. Al analizar la relación por dominio, se observa la misma correlación pero, como era de esperarse, en todos los niveles educativos los mejores salarios se ganan en San Pedro Sula y los peores en las ciudades pequeñas.

CUADRO 6.9

Ingreso promedio de la población ocupada por nivel educativo según dominio, 1990 y 1999

	primaria	secundaria	técnico formal	superior no universitaria	superior universitaria
1990					
Distrito Central	350.5	628.3	696.1	1,754.4	2,068.8
San Pedro Sula	399.8	653.6	790.2	3,948.1	1,530.0
Ciudades Medianas	356.2	646.0	708.2	1,200.0	1,375.9
Ciudades pequeñas	334.3	733.7	347.3	567.8	1,496.6
Rural	273.9	642.3	314.5		786.5
Urbano	354.7	660.3	641.7	2,103.0	1,825.5
Total	310.5	657.4	567.2	2,103.0	1,778.3
1999					
Distrito Central	1,716.1	2,606.2	3,409.1	4,720.4	6,279.0
San Pedro Sula	2,214.2	3,450.2	4,007.4	6,100.4	7,262.3
Ciudades Medianas	1,776.0	2,801.9	6,880.2		8,788.6
Ciudades pequeñas	1,716.5	2,351.1	2,069.4	3,544.8	4,569.1
Rural	1,245.7	2,425.3	1,777.5	5,308.5	4,433.9
Urbano	1,817.7	2,719.0	3,885.3	4,874.5	6,579.7
Total	1,501.8	2,651.5	3,453.2	4,928.0	6,436.9

Fuente: Elaboración propia con base en D.G.E.C. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 1990 y 1999.

En el cuadro 6.10 se observa que los años de estudio del jefe de hogar son un factor a tomar en cuenta. Allí se constata la misma tendencia observada antes en otros contextos, es decir, que conforme aumentan los años de escolaridad también crecen los ingresos y que los mejores niveles educativos los tienen quienes viven en el área urbana y el mayor nivel de pobreza los sufren los habitantes de la zona rural.

Si se concentra la atención en el área rural se aprecia que conforme aumentan los años de escolaridad de los jefes de hogar menor es el grado de pobreza. Por ejemplo, en los hogares en donde los jefes no poseen ningún nivel de escolaridad, la incidencia de la pobreza es del 84.2%, en comparación con sólo el 13% en aquellos donde es superior a los 13 años.

La incidencia es más baja en las zonas urbanas, pero también aquí presenta diferencias considerables: el grupo de jefes de hogar sin ningún nivel de

escolaridad es el más vulnerable (54%), mientras que el de quienes cuentan con más de 13 años casi no lo es del todo (3%).

El cuadro 6.11, que relaciona el nivel educativo de los jefes de hogar con la incidencia de la pobreza, ofrece una imagen similar, de manera global. A medida que el nivel educativo aumenta, suben los salarios y disminuye la condición pobreza. La mayoría de los pobres son aquellos que no han completado la primaria. Lo anterior concuerda con otros estudios que se han hecho en la región.

Desde mediados de la década de los noventa, la CEPAL ha tratado en varios estudios de establecer qué nivel educativo se necesita para alcanzar el bienestar en Latinoamérica (véase CEPAL, 1994; 2000c). Debido a dificultades estadísticas, el estudio realizado con este propósito por la CEPAL cubrió las áreas urbanas de un grupo de países (incluido Honduras) que son representativos de los diversos y desiguales grados de desarrollo socioeconómico y

CUADRO 6.10

Incidencia de la pobreza por años de estudio del jefe de hogar y zona de residencia, 1999

Años de estudio	% población		% pobres		Ingreso promedio (en Lps)	
	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano
0	34.7	16.2	84.2	53.9	290.1	534.0
1 a 3	32.8	19.9	76.4	46.6	384.3	709.9
4 a 6	26.9	32.5	71.5	37.6	456.2	830.2
7 a 9	2.6	8.7	62.8	25.3	693.3	1,083.2
10 a 12	2.5	14.5	36.2	14.3	1,152.5	1,434.1
13 a 20	0.5	8.3	13.3	3.1	1,803.5	3,030.6

Fuente: IPEA, 1999.

CUADRO 6.11

Pobreza por nivel educativo alcanzado por los jefes de hogar, 1999

Nivel alcanzado	% de la población	% de los pobres	Ingreso promedio (en Lps.)
Ninguno	26.5	75.9	356.5
Primaria (1-3)	27.1	66.6	491.0
Primaria (4-6)	29.7	54.8	640.1
Secundaria (1-3)	5.2	35.5	977.8
Secundaria (4-7)	7.7	18.3	1,383.5
Superior	3.9	3.8	2,947.8

Fuente: Elaboración propia con base en IPEA, 1999.

educativo de la región y se concentró, para efectuar la comparación, en los aspectos cuantitativos.

El estudio encontró que a inicios de los años noventa en las áreas urbanas se necesitaban 11 ó 12 años de escolaridad o, en la mayoría de casos, completar la secundaria como requisito para alcanzar el bienestar, es decir, contar con más del 80% de probabilidades de evitar la pobreza (CEPAL, 2000c: 35).

Los estudios de la CEPAL también han encontrado que más o menos independientemente del tamaño y la estructura del núcleo familiar y de la estrategia de empleo de los otros miembros de éste, las personas con el más representativo nivel de educación en cada país (de 10 a 14 años de escolaridad) tienen de un 82% a un 97% de probabilidades de evitar la pobreza. Este nivel de educación muestra un grado significativo de inmunidad a la pobreza, independientemente de la magnitud y extensión de la misma en el país.

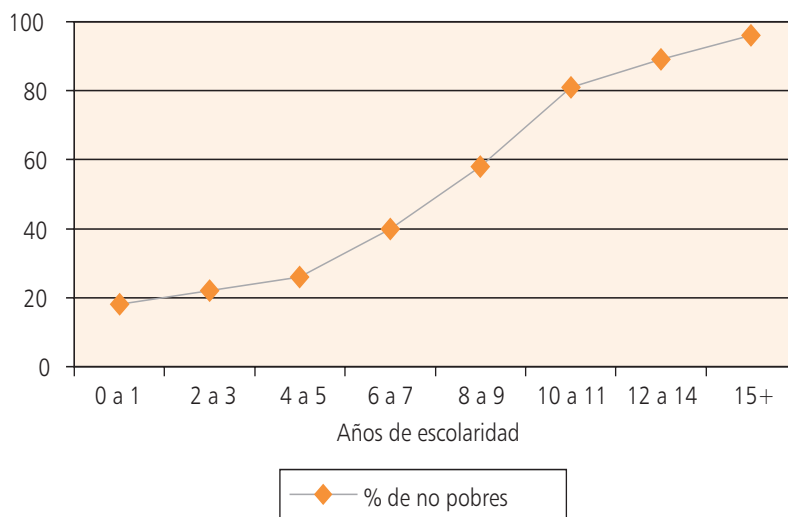
En Honduras, en 1990, las personas de 35 a 54 años que en las áreas urbanas contaban con 10 u 11 años de escolaridad poseían un nivel de ingreso 6.3 veces mayores que la línea de pobreza. Además, el porcentaje de quienes no eran pobres en este grupo ascendía al 82%.

En 1990, tal como lo muestra el gráfico 6.5, entre mayor era el número de años de escolaridad de los asalariados mayores eran sus posibilidades de pertenecer al grupo de quienes no son pobres. Mientras que las personas con una escolaridad de cero a un año tienen más del 80% de posibilidades de pertenecer al grupo de los pobres, lo opuesto sucede con aquellas con 10 ó más años. Parece, por lo tanto, que para tener mejores opciones de no pertenecer al grupo de los pobres, se debe contar al menos con la secundaria completa.

La CEPAL en otra de sus publicaciones sobre el tema, *Impacto de invertir más y mejor en la educación media* (CEPAL, 1996: 1), señala que «la importancia de acceder a la educación media y completarla radica en que actualmente en los países de América Latina, es preciso haber cursado diez o más años de estudio -y cada vez más el ciclo medio completo- para tener buenas posibilidades de acceder al bienestar, es decir, un 90% o más de probabilidad de no caer en la pobreza». Desafortunadamente, la educación media en la región latinoamericana y, especialmente, en Honduras, se encuentra en una situación crítica de baja cobertura, pobre calidad y poca vinculación con el mundo de trabajo (véase el capítulo 5). En el contexto de los actuales esfuerzos por aliviar y reducir los altos índices de pobreza del país, es necesario focalizar la atención en este nivel educativo.

GRAFICO 6.5

Curvas de ingreso de la población de 10 a 67 años sin educación y con primaria completa, 1999



Fuente: Elaborado por Kielland, A. con base en D.G.E.C. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 1999.

Los nuevos desafíos educativos y laborales

El mundo ha experimentado durante las últimas décadas un auge económico sin precedentes. Este avance se debe, sobre todo, a la capacidad del ser humano de dominar y organizar su entorno en función de sus necesidades, es decir, a la ciencia y a la educación.

El progreso técnico y la globalización han venido, en la época actual, aumentando el papel de la educación en la economía. Los estudios comparativos internacionales ponen de relieve lo importante que es para la productividad el capital humano y, por consiguiente, la inversión en educación. Las relaciones entre el ritmo del progreso técnico y la calidad de la intervención humana se tornan cada vez más estrechas. Se hace imprescindible la formación de agentes económicos capaces de utilizar las nuevas tecnologías y manifestar un comportamiento innovador. Se exigen nuevas aptitudes y los sistemas educativos deben responder a esta necesidad no sólo garantizando los años estrictamente necesarios de escolaridad o de formación profesional, sino formando científicos, personal innovador y tecnólogos de alto nivel (Delors, J., et al., 1997).

Por otro lado, el crecimiento de los mercados actuales, la apertura de otros y la incorporación de nuevas tecnologías llevan, tanto a una especialización de las ocupaciones como a una heterogeneidad cada vez mayor de los trabajadores que en ellas se desempeñan. Ambos procesos deben balancearse para que los trabajadores puedan adaptarse con relativa facilidad a los cambios y nuevas exigencias.

Se requiere de instituciones que faciliten y reduzcan los costos de coordinación, que mejoren la información con que los agentes toman sus decisiones y, en particular, que permitan una movilidad y capacidad de adaptación más rápida y menos costosa de los trabajadores hacia los sectores, ocupaciones y regiones donde la productividad marginal es mayor (González, P., 1993).

Por ello, es primordial seguir e incluso, si fuera posible, adelantarse a los cambios tecnológicos que afectan permanentemente la índole y organización del trabajo. En todos los sectores, incluida la agricultura, se requieren competencias dinámicas articuladas a la vez en conocimientos y competencias profesionales actualizadas. Esta imperiosa necesidad se opone a la rutina y a los grados de calificación adquiridos por imitación o repetición. Se constata, conforme produce sus efectos la llamada «revolución de la inteligencia», que son cada vez más decisivas las inversiones que, como en la educación, son denominadas inmateriales. La formación permanente de la mano de obra adquiere el carácter de una inversión estratégica que entraña la movilización de varios tipos de agentes: el sistema educativo, los formadores privados, los empleadores y los representantes de los asalariados (Delors, J., et al., 1997). El país ya no puede seguir formando, sobre todo a nivel medio y superior, profesionales que no responden a las necesidades de su desarrollo. En el mismo sentido, si es necesario adaptar la educación formal a las necesidades cambiantes del mercado laboral, con mucha más razón es necesario reformar y mejorar la oferta de la educación no formal para atender ese creciente número de personas que se están incorporando al sector informal de la economía.

La situación actual produce una paradoja en la especialización creciente de las ocupaciones. La educación básica y media deben ser cada vez más generales y, al mismo tiempo, preparar al trabajador para reaccionar adecuadamente en un medio en constante cambio.

Por eso, la primera dificultad a superar es definir qué tipo de trabajador requiere el aparato productivo. Una vez hecho esto, que debería ser parte de la labor de las Secretarías de Trabajo y Educación, en colaboración con la empresa privada y las organizaciones de los trabajadores y la sociedad civil, se debe incorporar esa definición, junto con otros aspectos como la formación en valores, en el ejercicio de la democracia, en el mejoramiento de la calidad de vida, como uno de los objetivos principales de la política educacional.

No es fácil definir las características deseables

de un trabajador del siglo XXI, pero se pueden lograr consensos alrededor de los siguientes criterios generales en cuanto a la educación, sobre todo a la enseñanza primaria y media:

1. Formar un individuo creativo, con capacidad de dar soluciones imaginativas y proponer acciones novedosas.

2. Fortalecer la capacidad analítica y lógica y del dominio de los principios y de las operaciones básicas de la matemática de forma aplicada.

3. Impulsar el dominio de la lengua materna y por lo menos de un idioma extranjero, tanto en lo que se refiere a la lectura, como a la expresión oral y escrita.

4. Fomentar la formación para el trabajo, sobre todo en lo referente a la formación cívica. Se deben inculcar valores individuales y sociales de alta rentabilidad en el mundo del trabajo y con importantes externalidades en la vida cotidiana, como los de responsabilidad, autonomía individual y capacidad crítica.

5. Desarrollar la capacidad de buscar información y aprender, lo que se ha resumido en la conocida fórmula de «enseñar a aprender» (González, P., 1993).

Aunque estas ideas distan mucho de ser exhaustivas con respecto a lo que se debe hacer en el campo educativo (véase también Scans, 1991), podrían ser un paso para avanzar hacia políticas educativas más integrales y actualizadas.

El gobierno está en la obligación de establecer o actualizar los estándares nacionales para el sistema educativo y medir el avance de su cumplimiento. Actualmente en Honduras se utiliza un instrumento de evaluación de los resultados del proceso educacional: la Unidad de Medición de la Calidad Educativa. Pero la acción de esta unidad técnica, además de ser reorientada, debe extenderse a los demás niveles educativos. Además, y aunque es un tema muy delicado, se debe considerar algún tipo de evaluación de los maestros y estudiar la posibilidad de ligar los resultados de las pruebas estandarizadas al tipo de financiamiento que se da a los centros escolares, a los incentivos, salariales o de otro tipo, que se dan a los maestros, tal como sucede en otros países². Por otra parte, es tiempo ya de establecer un mecanismo oficial para evaluar las capacidades de los estudiantes que aspiran a acceder a los niveles superiores de educación, tal como también se viene haciendo en otros países desde hace mucho tiempo. También es tiempo de que las universidades estatales programen su oferta con base en las necesidades reales de desarrollo y dejen de producir profesionales que nadie ocupa o puede utilizar.

Otro aspecto de gran importancia es la redefinición del papel del Estado en la educación de acuerdo con las nuevas realidades del país y el mundo. Este tiene que asumir las funciones primordiales a nivel central, regional y municipal. En el central, su primera función es impulsar el ya iniciado proceso de descentralización administrativa y otorgar ma-

yor control y poder a las escuelas y comunidades locales (PREAL, 1998). La segunda, la desburocratización del aparato central, lo cual debe implicar una completa reestructuración gerencial. La tercera, aumentar y distribuir equitativamente el gasto social en los servicios educativos.

A nivel regional lo principal sería buscar los medios para un adecuado financiamiento de las municipalidades y ayudarlas a que se hagan cargo de la labor de fiscalización de la actividad educativa y, más importante todavía, de los propios establecimientos.

La educación actual, como reiteradamente se ha dicho aquí, debe responder a las necesidades sociales y laborales de un país que debe salir del subdesarrollo e incorporarse a los cambios que en todos los órdenes se abren paso en el mundo. Con ese propósito, se debe tomar muy en cuenta que el incremento de la especialización ha sido uno de los factores para que los mercados crezcan. Sin embargo, distintas razones hacen suponer que mayor heterogeneidad del recurso trabajo no se traduzca en una mayor especialización en el nivel escolar. González (1993: 148) apunta correctamente las siguientes razones: primero, la creciente incertidumbre respecto al futuro lleva a la conveniencia de que el capital humano de los trabajadores sea crecientemente maleable, de modo que se reduzca al mínimo tanto las pérdidas del capital humano específico acumulado como los costos necesarios para readecuar las características de ese capital humano a las nuevas necesidades del entorno. Segundo, la misma incertidumbre aumenta el que sea deseable posponer la decisión de especialización hasta donde ello sea posible.

Las nuevas necesidades del aparato productivo, la incertidumbre creciente así como la minimización de los costos de coordinación, demandan una redefinición del «output» del sistema educativo, punto de partida sobre el cual debe pensarse la reforma de la educación escolar. Si bien en este capítulo se han mencionado algunas líneas generales, el tema queda abierto y en urgente necesidad de debate por parte del gobierno, la empresa privada y la sociedad civil.

Sobre la base de esa redefinición debe plantearse la elaboración de un buen instrumento de evaluación. Este es una necesidad ineludible en un sistema carente de incentivos adecuados, ya sea por el lado de la oferta (es necesario determinar la estructura de las remuneraciones), como por el de la demanda (debe proveerse más información a las familias para que puedan tomar decisiones).

Los incentivos por la demanda darían mayor peso a las preferencias de los demandantes directos, es decir de las propias familias, y al mismo tiempo permitirían introducir consideraciones de equidad basadas en la necesidad relativa de las familias. Por el lado de la oferta permitirían hacer uso explícito de mecanismos directos para mejorar la productividad de los profesores y tomar debida cuenta de los costos diferenciales de acuerdo con el tipo

de educación y la zona geográfica en la que se imparte. Estos incentivos y la evaluación directa de los profesores pueden ser importantes para mejorar en forma constante la calificación del magisterio, especialmente si se tiene en cuenta que los conocimientos en la actualidad tienden a volverse obsoletos muy rápido.

Para que la educación contribuya decisivamente a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo humano, en Honduras lo primero que debe hacerse es asegurar que la educación básica se extienda a todos y sea de por lo menos nueve años. En la medida en que el desarrollo tenga como objeto la plena realización del ser humano y no el convertirlo en medio de producción, es claro que esa educación básica deberá abarcar todos los elementos del saber necesarios para acceder a otros niveles de formación. Para las personas que no tengan acceso o no quieran acceder a la educación formal, se deben crear las oportunidades para que puedan acceder a una educación no formal de calidad que les permita desarrollar igualmente sus conocimientos, habilidades y destrezas y tener la oportunidad de tener un nivel de vida digno.

En general, tal como lo señala el Informe Delors (Delors, J., et al., 1997), conviene insistir en la función formadora de la enseñanza de las ciencias y definir una enseñanza que, desde la más temprana infancia y con medios a veces muy sencillos como la tradicional clase práctica de ciencias, sepa despertar la curiosidad del niño y desarrollar su sentido de observación e iniciarlo en una metodología de tipo experimental. Además, deberá dar a cada persona los medios de modelar libremente su vida y participar en la evolución de la sociedad, tal como se señaló en la declaración de *Educación para Todos* de Jomtien.

Siguiendo el mismo sendero del Informe Delors y teniendo como objetivo un desarrollo fundado en la participación responsable de todos los miembros de la sociedad, el principio general de acción que parece imponerse es alentar la iniciativa, el trabajo en equipo, las sinergias, el autoempleo y el espíritu empresarial; es menester activar en cada país los recursos y movilizar el conocimiento y los agentes locales, con miras a crear nuevas actividades que permitan conjurar los maleficios del desempleo tecnológico. En los países en desarrollo esta vía es el mejor medio de iniciar y alimentar un desarrollo endógeno. Los elementos de la estrategia educativa se deberán concebir, por consiguiente, de modo coordinado y complementario, ya que su fundamento común es la búsqueda de un tipo de enseñanza adaptada a las circunstancias locales, sin perder de vista las conexiones globales (Delors, J. et al. 1997).

En resumen, y considerando la educación como medio para lograr fines esenciales con el propósito de lograr el sostenimiento y progreso de la sociedad, la educación en Honduras debe acompañar los procesos de transición que está experimentando el país en los planos económico, político y so-

cial (véase PNUD/INDH, 1998). En el plano económico la educación es esencial para ampliar la capacidad productiva de la gente, de la oferta de trabajo y de la competitividad global del país; en el plano político la educación es clave para elevar la capacidad política de todos los ciudadanos y, en especial de sus dirigentes, con el fin de alcanzar consensos en cuanto a los intereses comunes y esenciales de todos los sectores para la consolidación y profundización de la democracia; y en el plano social, la educación es fundamental para reducir la pobreza, mejorar las condiciones de salud de las personas y disminuir las desigualdades de tipo económico, étnico, de género y ámbito geográfico.

A la luz de todo lo anterior, está claro que desde la perspectiva del desarrollo humano se tiene que superar toda concepción de la educación estrechamente utilitaria. Tal como se plantea en el Informe Delors, «La educación no sirve únicamente para proveer el mundo económico de personas calificadas; no se dirige al ser humano como agente económico, sino como finalidad del desarrollo. Realizar plenamente los talentos y aptitudes que cada persona lleva en sí responde a la vez a su misión fundamentalmente humanista, a la exigencia de equidad que debe guiar toda política educativa y a las verdaderas necesidades de un desarrollo endógeno, respetuoso del ambiente humano y natural y de la diversidad de las tradiciones y culturas. En particular, si bien es cierto que la formación per-

manente sigue siendo una idea esencial de finales del siglo XX, es necesario inscribirla, más allá de una simple adaptación al empleo, en la concepción más amplia de una educación a lo largo de toda la vida, concebida como la condición de un desarrollo armonioso y continuo de la persona» (Delors, J. et al. 1997: 84).

En línea con lo anterior, la educación nacional, incluida la formal y la no formal, no debe orientarse sólo al crecimiento económico sino más bien hacia el desarrollo humano sostenible. En tal sentido, la misma debe ser reconocida como un proceso mediante el cual los seres humanos y las sociedades pueden alcanzar su máximo potencial. La educación es crítica para promover el desarrollo sostenible y mejorar la capacidad de la gente para entender los problemas del ambiente y del desarrollo. Tanto la educación formal como la no formal son indispensables para cambiar las actitudes de la gente de tal forma que adquieran la capacidad para evaluar y enfrentar sus preocupaciones de desarrollo sostenible. La educación es también un factor crítico para alcanzar una conciencia ambiental ética, valores y conductas, destrezas y habilidades consistentes con las metas del desarrollo sostenible y para hacer posible que la gente participe en los procesos de decisión y se involucre en aquellas actividades que mejoran su calidad de vida y de la sociedad en general.

NOTAS

1 En general, la productividad promedio de un trabajador hondureño en cualquier sector es muy baja. Según datos que reporta la UNAT (2000:18), este promedio es de apenas US\$ 4,800 por año, muy por debajo de la productividad promedio en América Latina y en los países industrializados que es de US\$11,000 y de US\$ 31,000 por año respectivamente.

2 En Chile, por ejemplo, los resultados de las pruebas del SIMCE a nivel nacional se utilizan en parte para orientar los recursos hacia las escuelas más necesitadas. Cada escuela recibe un puntaje basado en el rendimiento promedio de sus alumnos en la evaluación nacional, el nivel socioeconómico de la escuela, su ubicación en el área urbana o rural y el número de grados que la escuela ofrece. De acuerdo con este puntaje, las escuelas se clasifican en establecimientos de alto, mediano o bajo riesgo. Más del 90% de los recursos disponibles para el mejoramiento de las escuelas se destinan a aquellas que se encuentran en las categorías de alto y mediano riesgo. Al interior de cada categoría, las escuelas compiten por los fondos mediante propuestas de actividades de mejoramiento del desempeño que requieren el apoyo financiero. Dichas actividades se evalúan para determinar si contribuyen a mejorar los puntajes que los alumnos obtienen en las pruebas (Banco Mundial, 1995).

